



Tomás Rau
 Profesor asociado y director del Instituto de Economía de la UC



Carlos J. García
 Académico Facultad de Economía
 Universidad Alberto Hurtado

Entre el espanto y la cordura

El gasto público de este año bordeará el 32% del Producto Interno Bruto (PIB) según el Informe de Finanzas Públicas (IFP) de la Dirección de Presupuestos (Dipres) del segundo trimestre. El masivo paquete de transferencias monetarias a los hogares, como el IFE universal, y otras políticas como los subsidios al empleo, han implicado un desembolso inédito de ahorros, como también un sostenido aumento del déficit fiscal y de la deuda pública.

Adicionalmente, el IFP proyecta que este año el déficit efectivo será del 7,1% del PIB y el déficit estructural llegará al 9,5% del PIB, acrecentando el divorcio con la hoy extemporánea y añorada regla de balance estructural. Más aún, el crecimiento de la economía no será suficiente para financiar el aumento del gasto público, lo cual acrecentará las necesidades de financiamiento fiscal.

En materia de deuda pública, algunas proyecciones indican que ésta podría alcanzar el 50% del PIB en pocos años y que los intereses de dicha deuda llegarían a los US\$ 5.700 millones (Clapes UC). Para poner en perspectiva esta cifra, los excedentes de Codelco el 2020 fueron US\$ 2.078 con un precio del cobre promedio de US\$ 2,80 la libra. Es decir, si el precio del cobre convergiera a los precios del año pasado, Chile necesitaría más del doble de los excedentes de Codelco para, solamente, pagar los intereses de la deuda.

En consecuencia, y tomando en cuenta el delicado contexto fiscal, el presupuesto 2022 debería considerar un recorte significativo del gasto público, conservando algunas ayudas orientadas a recuperar el empleo. En efecto, en su último informe el Consejo Fiscal Autónomo (CFA) plantea que es imprescindible propender gradualmente a un proceso de normalización fiscal y para ello sugiere el retiro progresivo de los estímulos fiscales transitorios de este año. Esta sugerencia del CFA es particularmente relevante en un país que ha enfrentado una inédita alza en las cifras de pobreza y la palabra focalización es a veces denostada en pos de la universalidad.

Según la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen 2020), Chile tiene un poco más de 2 millones de personas en situación de pobreza por ingresos, y las ayudas del Estado estarían llegando a 15,8 millones de personas (Ministerio de Desarrollo Social), de las cuales muchas de ellas no las necesitan. El Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES) se agota, quedando alrededor de US\$ 2.500 millones y meses de pandemia por delante. Las proyecciones de crecimiento para 2022 y 2023 indican un retorno a las escuálidas tasas de crecimiento pre-pandemia (entre 1,0 y 2,0% en 2023), lo que augura una estrechez fiscal muy preocupante. Aun aumentando la carga tributaria, el crecimiento del gasto no puede exceder al de la economía si queremos evitar un espiral de endeudamiento con todos los costos que ello implica.

Chile enfrenta grandes desafíos para alcanzar el desarrollo y para ello es crucial mantener la responsabilidad fiscal, que tanto ha servido para ir superando esta crisis, y que hoy enfrenta serias amenazas. El presupuesto 2022, con una amplia cuota de realismo, debiera orientarse en esa dirección y así transitar del espanto a la cordura presupuestaria. El desarrollo sostenible requiere el fin de la pobreza y para ello, es imperioso el uso responsable de los recursos.

Austeridad equivocada vs. mirada de largo plazo

Una de las cifras más dramáticas que he revisado en los últimos meses es la de los niveles de productividad laboral entre países. Si se compara el nivel de Chile con otras economías pequeñas y abiertas como Australia, Canadá, Nueva Zelanda y República Checa, estos países son entre un 50% y 100% más productivos que el nuestro en los últimos veinte años. En términos simples, en promedio un trabajador en esos países produce por lo menos un 50% más que un trabajador chileno. Más capital físico y humano explican esta diferencia, según nuestras teorías de crecimiento económico.

Este magro resultado es producto de nuestro modelo económico y de las pobres políticas públicas implementadas. Si bien el modelo logró tasas de crecimiento importantes del PIB en la última década del siglo pasado -producto de una serie de reformas promercado- la realidad es que

la fuerza del modelo se ha ido agotando. El crecimiento trimestral de la inversión es cada vez más bajo y no se observan cambios sustanciales en la calidad del capital humano. Después de la recuperación de este año, en los próximos dos las tasas de crecimiento volverán a ser menores de 2%.

El futuro se avizora muy poco auspicioso por dos elementos que cambiarán nuestra realidad en forma dramática y permanente: la robotización y el cambio climático. La irrupción del trabajo robótico en el mediano plazo probablemente deje aún más atrás a nuestra fuerza laboral y el cambio climático alterará las ventajas comparativas del país, además de la crisis humanitaria asociada a este fenómeno.

Considerando este contexto, no es momento para una austeridad mal entendida en el gasto del gobierno. En nuestra cultura, la característica de ser austero es una cualidad en contraposición a ser despilfarrador y la acumulación de deuda es vista como una actitud irresponsable. Sin embargo, los desafíos requieren que repensemos en cómo y en cuánto gasta el gobierno. Reducir en forma dramática este gasto sería un error fatal, pero seguir manteniendo su composición, básicamente asistencialista, también. Es momento de pensar en la inversión pública en dos áreas claves: infraestructura y capital humano especializado.

No se trata de sustituir al mercado, como es una expansión mal pensada del gobierno, y que la evidencia ha demostrado que inhibe el crecimiento, Jean-Marc Fournier y Åsa Johansson, 2016, *The effect of the size and the mix of public spending on growth and inequality*, Economics department working paper No. 1344, OCDE. Sino producir revoluciones en dos áreas complementarias al mercado, que nos permitan estabilizar no solo la economía sino también nuestra democracia, como lo muestra la misma evidencia antes señalada. Remarco que debe ser una revolución, y no reformas parciales e incompletas del pasado. Esta vez la mezquindad en los recursos será fatal.

Al respecto, el gasto del gobierno en términos del PIB en Chile está, por lo menos, siete puntos porcentuales por debajo de algunos de los países antes mencionados, y esta sería una meta para alcanzar rápidamente en los próximos años en términos de nueva inversión pública. Financiada, primero, con deuda externa, considerando que las tasas de interés externas se mantendrán bajas por las condiciones de baja productividad y natalidad en los países desarrollados, y luego con mayores impuestos, en la medida que recuperemos nuestro crecimiento extraviado.

¿Cómo debiera ser el próximo presupuesto de la nación en las actuales circunstancias del país?

A más tardar el 30 de septiembre el Ejecutivo debe presentar al Congreso Nacional para su discusión el proyecto de ley de Presupuestos para el año 2022. En esta oportunidad, atendida la carga fiscal que significan las medidas que se han debido adoptar para enfrentar las consecuencias económicas de la pandemia, sus orientaciones posibles son objeto del debate de los especialistas.

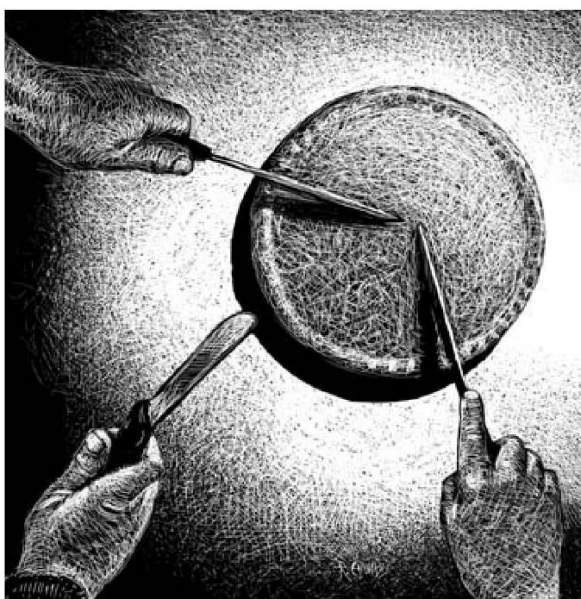


ILUSTRACIÓN: RAFAEL EDWARDS